



**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO  
ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS**  
Edificio Banco De La Republica Oficina 901 Teléfono 2616718  
e-mail: [lectoesrj@liba@notificacionestj.gov.co](mailto:lectoesrj@liba@notificacionestj.gov.co)  
Ibagué – Tolima

Ibagué (Tolima), Febrero veinticinco (25) de dos mil catorce (2014)

**SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA**

**Proceso Especial** : Solicitud Restitución de tierras (Propietario)  
**No. Radicación** : 73001-31-21-001-2013-000166-00  
**Solicitante** : Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de  
Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima en nombre y  
Representación de la ciudadana **ELSY MURCIA SANDOVAL**

**ASUNTO OBJETO DE DECISION**

Por cumplirse a cabalidad los preceptos establecidos en la ley 1448 de 2011, procede el Despacho a proferir la decisión de fondo que en derecho corresponda, respecto de la Solicitud de Restitución de Tierras instaurada por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, actuando en nombre y representación de la señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.796.868 expedida en Lérída (Tolima), y su núcleo familiar, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes:

**I.- ANTECEDENTES**

**1.1.-** La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima, en desarrollo y aplicación del artículo 105 y s.s., de la Ley 1448 de 2011, incluye dentro de sus funciones, entre otras las de diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción; igualmente, está facultada para acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados para presentarlas en los procesos o solicitudes de restitución y formalización; finalmente, tiene la facultad de tramitar ante las autoridades competentes y a nombre del titular de la acción de restitución de tierras, la solicitud de que trata el artículo 83 de la precitada ley.

**1.2.-** Bajo éste marco normativo, de manera expresa y voluntaria la señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.796.868 expedida en Lérída (Tol), en su doble calidad de **COPROPIETARIA** y **VICTIMA** de

**DESPLAZAMIENTO FORZADO**, del predio denominado **GUACOLDITA** distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 352-6224, actuando en causa propia y como titular del derecho, acude a esta sede judicial, al encontrarse inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, mediante **Constancia de Inscripción de Registro CIR 0137** expedida el once (11) de septiembre del año dos mil trece (2013), por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Tolima (U.A.E.G.R.T.D.), la cual es visible a folio 104 del expediente, solicitando que con fundamento en los preceptos del inciso final del artículo 81 de la Ley 1448 de 2011, se le designara un representante, para que en su nombre y en el de las copropietarias del predio, adelantara el trámite establecido en el Capítulo IV de la Ley en cita, interponiendo a su favor la correspondiente solicitud de restitución ante la instancia judicial que prevé el aludido ordenamiento, respecto del fundo antes mencionado.

1.3.- La causa petendi expuesta resume que la señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, inició su vinculación jurídica con el fundo denominado registralmente como **GUACOLDITA** ubicado en la vereda San José del Municipio de Lérída, Departamento del Tolima, el día 10 de mayo del año 1.985, fecha en la que el progenitor de la solicitante, **ALFONSO CEFERINO MURCIA**, transfiere el dominio del bien a favor suyo y de sus hermanas mediante la escritura pública No. 451 del mismo año, debidamente inscrita el 13 de diciembre de 2012, conforme se lee en la anotación No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria No. 352-6224 del Círculo Registral de Armero – Tolima. Tal y como consta en dicho instrumento, el señor **ALFONSO CEFERINO MURCIA**, transfiere a título de venta a las menores de edad **DEYANIRA, ELSY** y **LEOPOLDINA SANDOVAL**, representadas por su madre, **HEROÍNA SANDOVAL**, el derecho de dominio y posesión material sobre el predio **GUACOLDITA**. Luego, y en virtud del matrimonio celebrado entre los padres el día 14 de marzo de 1.987 se produjo la legitimación de las hijas habidas antes del matrimonio y por tanto, la solicitante como sus hermanas, llevan hoy el apellido de su padre identificándose con los apellidos **MURCIA SANDOVAL** (Fls. 141, 142 y 154).

1.4.- La señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, se desplazó de la zona en el año dos mil cinco (2005) con ocasión del secuestro del hijo de un vecino. Efectivamente, los paramilitares empezaron a desplazar gente, dejando la vereda San José vacía, pues se trató de un desplazamiento masivo propiciado por los paramilitares, lo cual generó temor en la población civil y fue esta situación la que obligó a la aquí solicitante **ELSY MURCIA SANDOVAL** a huir de la zona junto con su familia y abandonar así el predio del que era propietaria, limitando de manera ostensible y palmaria la relación con el mismo y generándose por tanto, la imposibilidad de ejercer las facultades de uso, goce y disfrute sobre dicho bien. Actualmente la señora **MURCIA SANDOVAL**, no ha retornado a la zona y el predio

se encuentra, según lo informado por la U.A.E.G.R.T.D, habitado por un tercero con consentimiento de la solicitante y de sus hermanas copropietarias del predio.

**1.5.-** Una vez la señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, y su núcleo familiar, integrado por sus hermanas y copropietarias **LEOPOLDINA** y **DEYANIRA MURCIA SANDOVAL**, tuvieron conocimiento de la existencia de acciones legales a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (U.A.E.G.R.T.D), acudieron a la citada institución, presentando la solicitud correspondiente, la cual se tramitó en virtud de los preceptos consagrados en el artículo 13 del Decreto 4829 de 2011, que efectuó la comunicación del estudio formal de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, dando así cumplimiento al requisito de procedibilidad que prevé el inciso quinto del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 (Fl.75 del expediente).

**1.6.-** Se itera asimismo, que conforme a la ratificación de información suministrada a través de la Unidad de Restitución de Tierras, al momento de desarrollarse la visita al fundo, el personal integrante de la diligencia comunicó que la solicitante no había retornado al mismo desde la ocurrencia del desplazamiento pero que se encontraba habitado por un tercero con consentimiento de la víctima señora **ELSY MURCIA SANDOVAL** y de sus hermanas copropietarias **LEOPOLDINA** y **DEYANIRA MURCIA SANDOVAL**.

## **II. PRETENSIONES:**

**2.1.-** En el libelo con que se dio inicio al proceso referenciado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial Tolima (U.A.E.G.R.T.D.), actuando a través de profesional del derecho especializado, a su vez representante legal de la solicitante **ELSY MURCIA SANDOVAL**, en síntesis, solicita que se acceda a las siguientes:

### **“PRETENSIONES PRINCIPALES**

**PRIMERA:** Se RECONOZCA la calidad de víctima de **ELSY MURCIA SANDOVAL**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868.

**SEGUNDA:** Se PROTEJA el derecho fundamental a la Restitución de Tierras de **ELSY MURCIA SANDOVAL**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868, y demás miembros del núcleo familiar, en los términos establecidos por la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia T-821 de 2007.

**TERCERA:** Se *RESTITUYA* a *ELSY MURCIA SANDOVAL*, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868, y demás miembros del núcleo familiar, su derecho de propiedad sobre el predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000, garantizando la seguridad jurídica y material del inmueble.

**CUARTA:** Se *ORDENE* a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Armero Guayabal – Tolima.

i) *Inscribir la sentencia en los términos señalados en el literal c del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.*

ii) *Cancelar todo antecedente registral, gravamen y limitaciones de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales.*

**QUINTA:** Se *ORDENE* al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos, atendiendo la individualización e identificación del predio lograda con el(los) levantamiento(s) topográfico(s) y el(los) informe(s) técnico(s) catastral(es) anexo(s) a esta solicitud, o de acuerdo con lo que después del debate probatorio que exista dentro del presente proceso se pueda determinar con respecto a la individualización material del(os) bien(es) solicitado(s) en restitución de tierras.

**SEXTA:** Se *RECONOZCA* a los acreedores asociados al predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000.

**SEPTIMA:** Se *ORDENE* al Municipio de Lérída, Tolima, dar aplicación al Acuerdo No. 09 del veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) y en consecuencia *CONDONAR* las sumas causadas hasta la fecha, inclusive los generados antes del desplazamiento, por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones, del predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000.

**OCTAVA:** Se *ORDENE* al Municipio de Lérída, Tolima, dar aplicación al Acuerdo No. 09 del veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) y en consecuencia

*EXONERAR, por el término establecido en dicho acuerdo, del pago de impuesto predial, tasas y otras contribuciones, al predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000.*

***NOVENA:** Se ORDENE al Fondo de la -UAEGRTD- aliviar las deudas que por concepto de servicios públicos domiciliarios, ELSY MURCIA SANDOVAL, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868, adeude a las empresas prestadoras de los mismos, por el no pago de los periodos correspondientes al tiempo transcurrido entre la fecha del hecho victimizante y la sentencia de restitución de tierras, y causados frente al predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000.*

***DECIMA:** Se ORDENE al Fondo de la -UAEGRTD- aliviar por concepto de pasivo financiero la cartera que ELSY MURCIA SANDOVAL, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868, tenga con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, adquiridas con anterioridad al hecho victimizante y sobre las cuales se haya incurrido en mora como consecuencia de este, siempre y cuando la deuda tenga relación con el predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000.*

***DECIMA PRIMERA:** Se OTORGUE a ELSY MURCIA SANDOVAL, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868, subsidio de vivienda de interés social rural, condicionado a la aplicación única y exclusiva sobre el predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000., siempre y cuando no se hubiere recibido dicho subsidio anteriormente bajo la situación de desplazamiento, abandono y/o despojo del inmueble, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1 del Artículo 8 del Decreto 2675 de 2005, modificado por el Artículo 2 del Decreto 094 de 2007.*

***DECIMA SEGUNDA:** Se ORDENE la implementación de proyecto productivo a favor de ELSY MURCIA SANDOVAL, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 28.796.868, que se adecue de la mejor forma a las características del inmueble, condicionado a la aplicación única y exclusiva sobre el predio Guacoldita de la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000.*

**DECIMA TERCERA:** *Si existiere mérito para ello, se DECLARE la nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieren otorgado sobre el(los) predio(s) objeto de esta solicitud.*

**DÉCIMA CUARTA:** *Se PROFIERA (Sic) todas aquellas órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del(os) bien(es) inmueble(s) y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos del(os) solicitante(s) de restitución.*

**DECIMA QUINTA:** *Se DECLARE la gratuidad de todos los tramites registrales tendientes a obtener la materialización del fallo de restitución.*

**DÉCIMA SEXTA:** *Se ORDENE a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a los entes territoriales y a las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas - SNARIV-, integrar a la(s) persona(s) sujeto(s) del presente proceso y su(s) núcleo(s) familiar(es) a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral en el marco del conflicto armado interno.*

**DÉCIMA OCTAVA:** *(Sic) Se CONDENE en costas a la parte vencida, de presentarse lo previsto en el literal s del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.*

**DECIMA NOVENA:** *Se DICTEN las demás ordenes que se consideren pertinentes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.*

## **8. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS**

*De considerarlo procedente, una vez analizadas las pruebas recolectadas a lo largo del proceso frene a la probable configuración de alguna de las causales establecidas en el artículo 97 de la ley 1448 de 2011 comedidamente solicito:*

**PRIMERA:** *Se ORDENE al Fondo de la -UAEGRTD- entregar al(a los) solicitante(s) cuyo bien sea imposible de restituir y a su núcleo familiar, a título de compensación, predio(s) equivalente(s) en términos ambientales; y de no ser posible, predio(s)*

equivalente(s) en términos económicos (Rural o urbano) conforme los preceptos del Artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, y los Artículos 36 a 42 del Decreto Reglamentario 4829 de 2011 y la Resolución No. 953 del Veintiocho (28) de Diciembre de Dos Mil Doce (2012), expedida por el Director General de la -UAEGRTD- y por la cual se adopta el Manual Técnico Operativo del Fondo de la UAEGRTD-; así como en el evento en que no sea posible ninguna de las anteriores formas de compensación se proceda a la compensación en dinero.

**SEGUNDA:** Se ORDENE al(a los) solicitante(s) cuyo(s) bien(es) sea(n) imposible(s) de restituir de conformidad con las causales legalmente establecidas, la transferencia y entrega material de dicho(s) bien(es) al Fondo de la -UAEGRTD-, una vez haya(n) recibido la compensación de que trata la pretensión anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el literal k del Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

### 9. PETICIONES ESPECIALES

**PRIMERA:** Se NOTIFIQUE y REMITA copia al suscrito, por el medio que el Despacho considere más eficaz, de todos y cada uno de los autos interlocutorios proferidos a lo largo del proceso judicial, así como de la sentencia y los autos que la modifiquen, corrijan y/o adicionen.

**SEGUNDA:** Se ORDENE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Armero Guayabal, Tolima, la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de la medida de protección jurídica prevista en el Artículo 19 de la Ley 387 de 1997.

**TERCERA:** Se CONCENTREN en este trámite especial todos los procesos o actuaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza que adelanten otras autoridades públicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de esta acción.

**CUARTA:** Se REQUIERA al Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, para que pongan al tanto a los Jueces, a los Magistrados, a las a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, a las Notarías y a sus dependencias u oficinas territoriales, sobre las actuaciones o requerimientos del proceso de restitución, lo anterior en los términos del Artículo 96 de la Ley 1448 de 2011.

**QUINTA:** Se ORDENE la suspensión de los procesos declarativos de derechos, procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el(los) predio(s) objeto de restitución, con excepción del proceso de expropiación.

**SEXTA:** Se REQUIERA a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, para que PRACTIQUE visita técnica y EMITA concepto respecto del predio objeto de la presente solicitud, estableciendo si el mismo se encuentra en una zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, u otro desastre natural o no, si dicho riesgo es mitigable o no, y que obras se requerirían para mitigar el mencionado riesgo de poderse realizar.

**SEPTIMA:** Se REQUIERA al Municipio, a través de su Oficina de Planeación o la que se haga sus veces, para que EMITA constancia mediante la cual se certifique si el bien inmueble objeto de restitución está o no ubicado en Zona de Amenaza o Alto Riesgo de Desastre no Mitigable.

**OCTAVA:** Se REQUIERA a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, a la Defensoría del Pueblo, al Departamento, al Municipio, a la Personería Municipal y demás autoridades competentes, para que EMITAN estudio de seguridad y/o concepto particular respecto si la restitución jurídica y/o material del bien implicaría un riesgo para la vida o la integridad personal de los restituidos, o de sus familias.

**NOVENA:** Se REQUIERA a la Central de Información Financiera -CIFIN-, para que INFORME las deudas que reporta(n) el(los) solicitante(s), que hubieren sido adquiridas con anterioridad a la fecha de desplazamiento y que actualmente se encuentren en mora.

**DECIMA:** Se REQUIERA al Municipio y a la Compañía Energética del Tolima -ENERTOLIMA-, para que INFORMEN si el(los) solicitante(s) adeuda sumas por concepto de servicios públicos domiciliarios, por el no pago de los periodos correspondientes al tiempo transcurrido desde la fecha del hecho victimizante, y causados frente al(a los) predio(s) objeto de restitución.



**DECIMA PRIMERA:** Se REQUIERA al Banco Agrario de Colombia y a –FONVIVIENDA–, para que INFORMEN si el(los) solicitante(s) ha(n) sido sujeto(s) de subsidio de vivienda de interés social rural bajo su condición de desplazamiento.

**DECIMA SEGUNDA:** Dada la especialidad del caso, en aras de celeridad al proceso, evitar dilaciones y duplicidad de pruebas, se solicita que de no presentarse oposición dentro de la etapa judicial, se PRESCINDA de la etapa probatoria, al tenor de lo dispuesto en el inciso 4 del Artículo 88 de la Ley 1448 de 2011 y en consecuencia, proceda a dictar sentencia con base en el acervo probatorio presentado en esta solicitud.”

### **III.- ACTUACIÓN PROCESAL**

**3.1.- FASE ADMINISTRATIVA.** La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Tolima, emitió la CONSTANCIA CIR 0137 del 11 de septiembre de 2013, mediante la cual se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido en el inciso quinto del art. 76 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el artículo 13 Numeral 2º del Decreto 4829 de 2011, tal y como consta en copia de la misma que obra a folio 104 del expediente y en la anotación No. 6 del folio de matrícula inmobiliaria (Fls. 137 y 138) dando así inicio formal a la etapa administrativa de la presente solicitud, que incluye entre otras el acopio de los documentos relacionados en el acápite pertinente del libelo introductorio.

**3.2.- FASE JUDICIAL.** Mediante auto calendado octubre 8 de 2013, el cual obra a folios 112 y 113 del expediente, éste estrado judicial admitió la solicitud por estar cumplidos a cabalidad los requisitos exigidos en los artículos 81, 82 y s.s., de la Ley 1448 de 2011, ordenándose simultáneamente, entre otras cosas la inscripción de la solicitud en el folio de matrícula inmobiliaria N° 352-6224; la orden para dejar fuera del comercio temporalmente el predio objeto de restitución como lo establece el literal b) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011; la suspensión de los procesos que tuvieran relación con el inmueble objeto de restitución, excepto los procesos de expropiación y la publicación del auto admisorio, conforme a la Ley 1448 de 2011, para que quien tenga interés en el fundo, comparezca y haga valer sus derechos.

**3.2.1.-** Conforme lo dispuesto en el numeral OCTAVO del auto proferido por éste despacho el 8 de octubre de 2013, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, aportó la publicación dirigida a todas las personas que se consideraran con derecho a intervenir en el proceso, tal y como consta en la

edición del periódico *El Tiempo*, realizada el día domingo 27 de octubre de 2013 y que obra a folio 162 del proceso y además aportó la certificación de emisión radial efectuada el pasado 6 de noviembre de 2013 en la emisora 100.0 de la Policía Nacional. Igualmente, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tol), hizo lo propio respecto del registro de la solicitud, tal y como consta en la anotación No. 7 del folio de matrícula inmobiliaria No. 352-6224 (Fls. 137 y 138), dándose por tanto cumplimiento al principio de publicidad.

3.2.1.1 Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral **SEPTIMO** del auto admisorio se procedió a notificar de la Solicitud de restitución a quienes figuran como titulares inscritas de derechos sobre el predio conforme al folio de matrícula inmobiliaria a saber, las señoras **DEYANIRA** y **LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL** quienes son las hermanas de la solicitante **ELSY MURCIA SANDOVAL**, diligencia que se surtió en fecha 24 de octubre de 2013, entregándoseles al efecto copia de la mentada solicitud. El abogado de la UAEGRTD, aportó como anexos del escrito allegado el 28 de octubre de 2013, los cuales obran a folios 140 a 141, copia de los registros civiles de nacimiento de las mencionadas, acreditando así en debida forma el parentesco de éstas con el señor **CEFERINO SANDOVAL**, a la sazón padre de las tres hermanas. (Fls. 130 a 132).

3.2.2.- Tal y como se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de restitución, tanto el **BANCO AGRARIO** (Fl. 139) como la Central de Información Financiera **CIFIN** (fls. 145 y 146); la **AGENCIA NACIONAL DE MINERIA** (Fls. 168 a 171) e **INCODER** (fls. 172 a 174) aportaron la información solicitada por ésta oficina Judicial.

**3.3.-INTERVENCION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.** En acatamiento de los preceptos establecidos en el literal d) del art. 86 de la Ley 148 de 2011, se notificó a la señora Procuradora 27 Judicial I para la Restitución de Tierras, quien concurrió al llamamiento, como consta en el escrito que para todos los efectos legales obra a folios 187 a 189, expresando en términos generales que no se opone a las pretensiones deprecadas, pero hace énfasis en que la solicitante, sólo ostenta calidad de propietaria de una cuotaparte, del inmueble a restituir.

#### **IV.- CONSIDERACIONES**

##### **IV.1.- JUSTICIA TRANSICIONAL.**

**IV.1.1.-** Tal y como se dijera en el auto admisorio de la presente solicitud, respecto de esta figura jurídica el legislador colombiano plasmó en el artículo 8º de la

Ley 1448 de 2011, la siguiente definición: **“ARTICULO 8° JUSTICIA TRANSICIONAL.** *Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad para garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”.*

*IV.1.2.-Para arribar al anterior precepto legal, se tuvieron en cuenta experiencias internacionales, que concibieron la JUSTICIA TRANSICIONAL como el conjunto de mecanismos implementados por algunas sociedades que han enfrentado los legados de violaciones masivas a derechos humanos ocurridas con ocasión de conflictos armados o regímenes dictatoriales. Es así, como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas “ONU” hizo a través de su Secretario General, un pronunciamiento en el año 2004, sobre el Estado de Derecho y Justicia Transicional en sociedades en conflicto y posconflicto, que la define de la siguiente forma:*

*“[...] abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados y con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”.*

*IV.1.3.- Armónicamente con lo ya discurrido, el suscrito juez considera que la justicia transicional, es el instrumento jurídico creado por el legislativo, como parte del andamiaje que desde un punto de vista macro, conforma el marco legal para ir estructurando la columna vertebral para la paz, y que es consecuencia directa de una serie ininterrumpida de actos de violencia, barbarie y terrorismo generalizado, realizados en forma indiscriminada por grupos armados ilegales que desde hace más de cinco décadas han venido desangrando nuestro país.*

#### **IV.2.- MARCO NORMATIVO.**

*IV.2.1.- Desde el mismo diseño constitucional, Colombia buscó proteger amplia y suficientemente los derechos de las víctimas, siendo así que dentro del segmento de los derechos fundamentales que consagra la Carta, artículos 11 y subsiguientes, se encuentran subsumidos los de la primacía de los derechos de la persona y protección de la*

familia, en los que obviamente se incluyen todos aquellos que estén en situación de desplazamiento forzado. En el mismo sentido, el artículo 2º de la Carta, estatuye como fines esenciales del Estado, entre otros, el de garantizar la efectividad de los derechos, atendiendo que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todos los residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Es así, que armónicamente desde el punto de vista constitucional, los diversos órganos y entidades del Estado, se han repartido multiplicidad de funciones, con finalidades específicas, como las de satisfacer y contribuir efectivamente con el derecho a la reparación de las víctimas despojadas, por lo que procedió a construir la plataforma administrativa y jurídica suficiente para ello, expidiendo los procedimientos y herramientas necesarias, para así permitir que todos aquellos que se vieron forzados a desarraigarse como consecuencia de hechos de violencia, tuvieran la oportunidad retornar, previa devolución del terruño que se vieron obligados a abandonar.

**IV.2.2.-** Dado el desbordamiento de la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado, la Corte Constitucional asumió con toda la entereza dicha problemática, profiriendo en consecuencia diversos pronunciamientos como la sentencia T-025 de 2004, en la que se resaltan como principales razones para declarar el estado de cosas inconstitucional, entre otras las siguientes:

“(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial. Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por del desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente.”

**IV.2.3.-** El marco legal de la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas está definido por la Ley 1448 de 2011 **“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”**, que se ha reglamentado a través de los siguientes decretos:

**Decreto 4633 de 2011:** a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

**Decreto 4634 de 2011,** a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos Rom o Gitano.

*Decreto 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.*

*Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.*

*Decreto 4829 de 2011, por el cual se reglamenta el capítulo 111 del Título IV la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.*

*IV.2.4.- Así, la Ley y sus decretos reglamentarios consagran el marco institucional, procedimental y sustancial para que el Estado provea las diferentes medidas a las que tienen derecho las personas víctimas del conflicto armado que se aglutinan básicamente en ese amplio conglomerado que conforma la población desarraigada, desplazada y despojada de sus bienes, y que por ende se les pueda brindar efectivamente los servicios de salud, educación, atención básica, auxilios y ayudas económicas, incluyendo medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda, flexibilización de pasivos y acceso a créditos, y las demás establecidas en la misma ley. Adicionalmente, es necesario precisar que en relación con las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011 se complementan con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica para la población víctima del desplazamiento forzado establecidas en la Ley 387 de 1997 y demás normas que la reglamentan; igualmente, con lo determinado en materia de goce efectivo de derechos de esta población, que no le sea contrario a la Ley de víctimas. Esta particular disposición se ve reflejada a su vez en el capítulo IV del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se establecen lineamientos de política pública dirigidos a la población víctima del desplazamiento forzado, los cuales hacen referencia al goce efectivo de derechos de la población víctima de este flagelo haciendo especial énfasis en aquellos que contribuyen al restablecimiento social y económico.*

#### **IV.2.5.- BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD:**

*Conforme los postulados consagrados en el artículo 27 de la Ley 1448 de 2011, “En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de la persona humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas.”*

*IV.2.5.1.- Armónicamente con el anterior precepto legal, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia prevé el llamado **BLOQUE DE***

**CONSTITUCIONALIDAD**, normatividad con base en la cual la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos jurisprudenciales, de los cuales entre otros se destaca el siguiente: "...Los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, así como la Interpretación que de ellos hagan los órganos competentes para tal fin, forman parte del bloque de constitucionalidad, y, en ese sentido, se convierten en parámetros de Interpretación y determinación del alcance de los derechos reconocidos en la Constitución y de la aplicación que de los mismos realicen los operadores judiciales". En ese sentido hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad de Colombia "los Convenios de Ginebra, que regulan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los casos de conflictos armados Internacionales y conflictos armados no internacionales (o internos), pues han sido incorporados a nuestra normatividad por medio de leyes. Igual sucede con el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

**IV.2.5.2.-** La Jurisprudencia constitucional, ha establecido en virtud de los artículos 94 y 214 de la Constitución Nacional que existen Normas Internacionales que constituyen el marco mediante el cual se puede direccionar la ejecución de la política pública de Restitución de tierras en Colombia, resaltando los que a continuación se enuncian: 1) Principios sobre reparaciones de las Naciones Unidas; 2) Principios Internacionales relativos a la restitución de Viviendas y Patrimonio de los refugiados y la población desplazada (PRINCIPIOS PINHEIRO) y 3) Principios Rectores de los desplazamientos conocidos como PRINCIPIOS DENG.

Así ha dicho la Corte: "**Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado. Ciertamente, si el derecho a la reparación Integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de Constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado (Constitución Política Art 93.2)."**

**IV.2.5.3.-** Respecto de lo que también se puede entender como **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**, es sabido y últimamente aceptado por algunos doctrinantes que la normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política. El Estatuto Superior está compuesto por un grupo más amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que lo conforman y que comparten con los artículos de texto de la carta la mayor jerarquía normativa en el orden interno. En este sentido, la noción “bloque de constitucionalidad” pretende transmitir la idea de que la Constitución de un Estado es mucho más amplia que su texto constitucional dado que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que también son normas constitucionales.

**IV.2.5.4.-** El **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991**, marcó una nueva pauta en el acoplamiento de las disposiciones internacionales al orden constitucional interno. Aunque no fue sino a partir del año 1995 que la Corte Constitucional adoptó el concepto de bloque de constitucionalidad - tal como se utiliza hoy en día - muchos de los fallos producidos antes de ese año reconocieron ya la jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales. El primer elemento en contribuir a este cambio fue la introducción en el texto constitucional de seis importantes artículos que redefinirían los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. Estos fueron:

- a) El artículo 9º, el cual reconoció que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia;
- b) El artículo 93, según el cual “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
- c) El artículo 94, que establece que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”
- d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2º: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetaran las reglas del derecho internacional humanitario”.
- e) El penúltimo inciso del artículo 53 que preceptúa: “Los convenios internacionales del tratado debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, y
- f) El artículo 101 inciso 2º que dice: “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”.

**IV.2.5.5.-** En conclusión, todo el ordenamiento, en su contenido positivo y en su aplicación práctica, debe adecuarse a las normas de jerarquía constitucional. Dando por sentado que las normas que integran el bloque de constitucionalidad son verdaderas

*normas constitucionales, bien vale entonces acoger las siguientes consideraciones de la Corte que obran como síntesis de la subordinación jurídica a que se ha hecho referencia.*

*En cuanto a la protección de derechos de los desplazados respecto de sus bienes, éstos se encuentran debidamente consagrados como parte integral de las obligaciones que tiene el Estado, debiendo implementar para ello las pautas de comportamiento diseñadas para que las autoridades, puedan evitar abusos y como consecuencia directa de ello, se garantice el uso y goce efectivo de sus posesiones o propiedades.*

**IV.2.5.6.-** *Estos son los denominados **Principios Rectores de los Desplazamientos Internos**, que se sintetizan así:*

**PRINCIPIO 21:**

- 1.- *Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones.*
- 2.- *La propiedad y las posesiones de los desplazados Internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los siguientes actos:*
  - a) *expolio;*
  - b) *ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;*
  - c) *utilización como escudos de operaciones u objetos militares;*
  - d) *actos de represalia; y*
  - e) *destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.*
- 3.- *La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o usos arbitrarios e ilegales.*

**PRINCIPIO 28**

*1.- Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.*

*2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.*

**PRINCIPIO 29**

*1.- Los desplazados Internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de Igualdad a los servicios públicos."*

**IV.2.5.7.-** *De conformidad con los **PRINCIPIOS PINHEIRO**, sobre la **RESTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EL PATRIMONIO DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS**, tales elementos resultan fundamentales en la justicia restitutiva, pues su esencia radica en impedir efectivamente*



que se vuelvan a producir situaciones de desplazamiento, para así ayudar a consolidar el logro de la paz. Es así, que todos los refugiados y deslazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal Independiente e imparcial, para lo cual los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como medio preferente de reparación en esta especial clase de justicia, sin olvidar que éste es un derecho en sí mismo y por lo tanto es independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista razón en su reclamación.

*IV.2.5.8.- Que conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, específicamente el 9, el cual establece que "Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma" y por tal razón, la comunidad en bloque solicita a instituciones del Estado que les amparen sus derechos.*

#### **V. CASO CONCRETO:**

*V.1.- Descendiendo al estudio del caso particular que ahora nos ocupa, es preciso tener en cuenta que del acervo probatorio recaudado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Dirección Territorial Tolima (U.A.E.G.R.T.D.) lo primero que se logra establecer es que la solicitante señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.796.868 es actualmente la propietaria inscrita en común y proindiviso con sus hermanas **LEOPOLDINA** y **DEYANIRA MURCIA SANDOVAL**, del predio objeto de restitución, identificado con el nombre de **GUACOLDITA** y distinguido con el **Folio de Matrícula Inmobiliario Nos. 352-6224**. A su vez, la vinculación jurídica de la solicitante y de sus hermanas con dicho bien se remonta al día 10 de mayo del año 1.985, fecha en la que su progenitor, señor **ALFONSO CEFERINO MURCIA**, transfiere el dominio del bien a favor suyo y de sus hermanas mediante la escritura pública No. 451 del mismo año, debidamente inscrita el 13 de diciembre de 2012, conforme se lee en la anotación No. 2 del folio de matrícula inmobiliaria No. 352-6224 del Circulo Registral de Armero - Tolima. Tal y como consta en dicho instrumento, el señor **ALFONSO CEFERINO MURCIA**, transfiere a título de venta a las menores de edad **DEYANIRA**, **ELSY** y **LEOPOLDINA SANDOVAL**, representadas por su madre, **HEROÍNA SANDOVAL**, el derecho de dominio y posesión material sobre el predio denominado **GUACOLDITA**. Luego, y en virtud del matrimonio celebrado entre los padres el día 14 de marzo de 1.987, se produjo la*

legitimación de las hijas habidas antes del matrimonio. Por lo antes narrado, tanto la solicitante como sus hermanas, llevan hoy en día el apellido **MURCIA SANDOVAL**, correspondiente al de su padre (Fls. 141, 142 y 154).

*V.1.2.- También quedó demostrado, que el Grupo Armado Organizado ilegal -GAOI, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo o FARC – EP – tuvo en la década de los 90 un proceso de expansión territorial fruto de la crisis cafetera de dichos años lo que permitió que el mismo se asentara en la zona del norte del departamento del Tolima. La presencia de dicho grupo guerrillero pasa a ser sostenida por cerca de dos décadas con acciones que son altamente registradas y denotan la ampliación de la mencionada cobertura territorial de las FARC con el Frente “Tulio Varón” y la Columna Móvil “Jacobo Prías Alape”. Asimismo, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- fundó en esta región el Frente “Bolcheviques del Líbano” y El Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP-, una disidencia del ELN, los cuales también se asentaron en la región, sometiendo a la población a sufrir el flagelo de sus extorsiones, saqueos, control de salarios, homicidios y violaciones. Se señala en relación con dicha época, que desde el carnicero y el tendero debían pagar la denominada “vacuna”, y de la misma forma los transportadores eran presionados, los productos de las tiendas robados y quien no pagaba era sentenciado a muerte. Posteriormente, y debido a la escabrosa expansión de los grupos guerrilleros, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y las Campesinas del Magdalena Medio –ACMM- al mando de alias Ramón Isaza, entraron en la disputa territorial y por tal motivo se desató en el año 2000, una ola de masacres y homicidios selectivos de supuestos auxiliares de la subversión. Sobra decir que estos hechos produjeron también la intensificación de fenómenos tales como la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado. Para el caso de Lérida, los reportes indican que existió un período de máxima ocurrencia de desplazamiento forzado en la zona en los años comprendidos entre 2004(130); 2005 (177); 2006 (395); 2007 (360); 2008 (381) y 2009 (203). En el año 2006 y luego de la desmovilización del Bloque Tolima, la Guerrilla regresa a la zona que era controlada por los paramilitares y asesinan al presidente de la Junta de la vereda Carabalí, señor Alfredo Suarez e incineran su vehículo. Asimismo, en el sector de las Delicias del municipio de Lérida, asesinan a Alfredo Suarez Suárez de apenas 16 años de edad, reconocido en la comunidad por manejar una de las líneas de Transporte hacia las veredas de la zona y los hermanos Rosendo y Luis Carlos Calderón Cáceres de 41 y 45 años respectivamente, residentes de la zona, lo que conllevó al desplazamiento masivo de los habitantes del lugar, entre cuyas víctimas se cuenta la aquí solicitante.*

*V.1.3.- A su vez, los hechos de violencia que provocaron el desplazamiento de la señora **ELSY MURCIA SANDOVAL**, (Fls. 41 a 43), en el año dos mil cinco (2005), se dieron con ocasión del secuestro del hijo de un vecino. Efectivamente, la señora **MURCIA SANDOVAL**, indica que los paramilitares empezaron a desplazar gente, dejando la*

vereda San José prácticamente vacía. Indica que ella residía en el predio **GUACOLDITA** junto con su núcleo familiar siendo su esposo trabajador del predio de los vecinos. Tuvieron que sufrir entonces el secuestro del hijo de éste señor, y la muerte de tres muchachos, de nombres Alfredo, Carlos, y Rosendo en la finca Versalles, que era una finca intermedia. Señala que allí secuestraron al administrador pensando que era el dueño y por eso, sufriendo dicha situación, decidieron venirse de la finca, la que dejaron abandonada limitando de manera ostensible y palmaria la relación con el mismo. Actualmente, ni la solicitante ni sus hermanas han podido retornar a la zona, lo cual fue debidamente verificado por la U.A.E.G.R.T.D., cuando en desarrollo de la fase administrativa, al realizar la inspección ocular correspondiente, establecieron que el predio se encontraba habitado por un tercero con el consentimiento de la solicitante.

**V.1.4.- En relación con los hechos descritos por la solicitante,** en la etapa administrativa se recepcionó la DECLARACION de la señora **LUZ MARINA RODRIGUEZ RUEDA**, (Fls. 44 y 45), quien manifestó residir en el municipio de Lérída hace 20 años y actualmente en la vereda San José, específicamente en el área urbana del municipio. Indica que conoció a la señora **ELSY MURCIA**, por cuanto eran vecinos y siempre se encontraban. Relata que la solicitante cultivaba en el predio de su propiedad plátano, yuca, aguacate y que tenía igualmente ganado. Señala que el predio se encuentra abandonado y que Elsy Murcia se desplazó para el año 2006 sin que haya regresado a la zona.

**V.1.5.-** Se recepcionó también la DECLARACION del señor **JOSE AURELIO LOZANO SANCHEZ** (Fls.46 y 47), quien manifestó que es una persona nacida y criada en la zona del municipio de Lérída, viviendo en la vereda San José, luego en el Llano y ahora en el casco Urbano del municipio. Relata que conoce a la solicitante **ELSY MURCIA** por cuanto él empezó trabajando en la finca de ellos y después de la salida de la finca fue arrendatario de la familia en Lérída. Indica que los predios que tenía en la vereda eran el Predio 61 y Guacoldita, los cuales fueron adquiridos por Herencia porque la mamá los había comprado. Señala que allí se cultivaba aguacate, yuca, plátano, maíz y ganado. Asegura que actualmente los predios están mitad en pastos y el resto en montes. Finalmente, indica que salieron por haber sido hostigados por grupos que los amenazaron por medio de los vecinos y que vivieron dos enfrentamientos en aquella época, por lo que el desplazamiento se llevó a cabo entre el 2005 y el 2006.

**V.1.6.-** Obra en el plenario la DECLARACION del señor **ROGELIO GUTIERREZ**, (fls. 48 a 50) quien indicó ser nacido y criado en la zona de Lérída primero en la vereda San José y ahora en el perímetro urbano del municipio. Indica que conoce a la señora **ELSY MURCIA** por ser colindante en la vereda con ella pues él compró la finca hace

más o menos nueve años. Asevera que la misma cuenta con dos predios que están pegados y que allí se cultivaba aguacate, maíz, yuca y plátano cachaco. Cuando él llegó ellos ya residían allí. Actualmente indica que el predio se encuentra enmontado y señala que la señora Murcia fue la última que salió de la zona, desde hace más o menos como ocho años. Finalmente agrega que prácticamente ellos no volvieron allá a la zona de la vereda.

*V.1.7.- En el mismo orden de ideas, militan a folios 76 a 88 del plenario diversas publicaciones del periódico El Nuevo Día, donde se hace una prolífica exposición de los múltiples hechos generadores de violencia en el Departamento del Tolima y especialmente en el municipio de Lérída, que comprueban el desplazamiento en que se vio envuelta la comunidad de dicha población, entre ellas la señora **ELSY MURCIA SANDOVAL** y su núcleo familiar.*

*V.1.8.- Asimismo y como parte del acervo probatorio recaudado, a folios 24 a 29 obra copia de la Escritura Pública No. 0451 del 10 de Mayo de 1.985 mediante la cual el señor **ALFONSO CEFERINO MURCIA**, transfiere a título de venta a favor y para el patrimonio de las menores **DEYANIRA, ELSY** y **LEOPOLDINA SANDOVAL**, representadas por su señora madre **HEROÍNA SANDOVAL**, el dominio y la posesión material sobre el lote de terreno denominado **GUACOLDITA** ubicado en la antigua comunidad de San Francisco de la Sierra, jurisdicción del municipio de Lérída Tolima.*

*Así las cosas, necesario será que el despacho se refiera al derecho de propiedad en común y proindiviso que desde las citadas fechas, viene ostentando la aquí solicitante junto con sus hermanas, frente al predio que ha tenido que abandonar a causa del contexto de violencia al que hemos hecho referencia.*

***V.2.- EL DERECHO DE PROPIEDAD**, de conformidad con los postulados establecidos en el art. 58 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999, dice: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. ...La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.” ...El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. ...”*

*V.2.1.- Armónicamente con lo antes expuesto, e iterando que la solicitante en el presente proceso ostenta calidad de copropietaria inscrita del predio objeto de restitución, se considera oportuno traer a colación lo que al respecto expresó la H. Corte Constitucional en su sentencia C-189 de 2006, al tratar sobre las características del derecho de propiedad, así:*

*“...Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar las siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue - en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas.*

*...El Decreto 2007 de 2001, en los artículos 1 y 4, establecen que una vez el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, declara la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia en una zona determinada del territorio sometido al ámbito de su competencia, los predios rurales afectados no podrán ser objeto de enajenación o transferencia a ningún título mientras permanezca dicha declaratoria, a menos que se obtenga la autorización correspondiente por parte del citado Comité y siempre que la enajenación no se haga a favor del INCORA. A juicio de la Corte, la citada limitación de enajenación no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues su objetivo es precisamente preservar la plena disponibilidad de los bienes patrimoniales de la población sometida a actos arbitrarios de desplazamiento contrarios a su derecho fundamental de locomoción.*

*...La propiedad privada, como fundamento de las relaciones económicas, sociales y políticas, ha sido concebida a lo largo de la historia, como aquella relación existente entre el hombre y las cosas que lo rodean, que le permite a toda persona, siempre y cuando sea por medios legítimos, incorporar a su patrimonio los bienes y recursos económicos que sean necesarios para efectuar todo acto de uso, beneficio o disposición que requiera.*

*...El concepto de propiedad no ha sido una idea estática e inamovible. En un comienzo en el derecho romano fue concebido bajo una estructura sagrada, absoluta e inviolable, que a pesar de ser abandonada en la época feudal por razón de la*

restricción del comercio, fue retomada al amparo del triunfo de las revoluciones burguesas, configurándose -en ese momento- como un derecho natural de los ciudadanos contra la opresión del monarca. De esta forma el derecho a la propiedad, aseguró a cada hombre un espacio exclusivo e imperturbable en el que no existía injerencia alguna sobre sus bienes, y que garantizaba un poder irrestricto y autónomo sobre sus posesiones.

...5. Ahora bien, conforme a la normatividad civil se entiende por dominio o propiedad, el derecho real más completo que se puede tener sobre una cosa corporal o incorporal, ya que otorga a su titular las máximas facultades que se pueden predicar sobre un bien. Así se encuentra definido en los artículos 669 y 670 del Código Civil, en los siguientes términos:

**“Artículo 669.** El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. / La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

“...La Constitución de 1991 reconstituyó a Colombia como un *“Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria... fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”*. // Como lógico corolario, la configuración del derecho de propiedad (reiterativa de la inconsistencia anotada a propósito de la Reforma de 1936), se hizo atenuando aún más las connotaciones individualistas del derecho y acentuando su función social; agregó además el Constituyente que al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y creó, con el mandato de que sean protegidas, y promovidas formas asociativas y solidarias de propiedad. (...)

...En cuanto a sus atribuciones, las mismas persisten desde el derecho romano y se resumen en los actos materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, reconocido como el *ius utendi*, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de *ius fruendi* o *fructus*, se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina *ius abutendi*, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien.

**V.2.2.-** Hecho entonces el recuento de los hechos de violencia, y comprobándose sin hesitación alguna la calidad de propietario - víctima – desplazada, de la aquí solicitante, así como las demás vicisitudes que rodearon la solicitud de restitución del inmueble objeto de éste proceso, será pertinente entonces, habida cuenta de la discordancia encontrada entre los datos suministrados por la solicitante, así como la información plasmada en la Escritura Pública No. 0451 del 10 de mayo de 1.985, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Información contenida en el Folio de Matrícula inmobiliaria suministrado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero - Tolima, establecer con base en el levantamiento topográfico actualizado realizado al inmueble por personal técnico científico adscrito a la

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, tanto el tamaño, la alinderación y las coordenadas planas y geográficas reales que permitan individualizar el predio objeto de restitución, así:

**V.2.2.1.- INMUEBLE** denominado registral y catastralmente como GUACOLDITA y distinguido con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 352- 6224 así como con código catastral No. 00-02-0015-0013, ubicado en la vereda San José del municipio de Lérída – Tolima, cuenta con una extensión real de **CINCO HECTAREAS CON CUATRO MIL ONCE METROS CUADRADOS (5. Has 4011 M2)**, conforme al levantamiento Topográfico realizado por la U.A.E.G.R.T.D., el cual obra a folios 59 a 69 del expediente y cuyas coordenadas planas y geográficas, con sistema de coordenadas -MAGNA COLOMBIA BOGOTA- se transcribirán por economía procesal en el acápite resolutivo de la presente sentencia.

**V.3.- APLICACION DEL ARTICULO 97 DE LA LEY 1448 DE 2011**, que dice: “...Como pretensión subsidiaria, el solicitante podrá pedir al juez o Magistrado que como compensación...y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de similares características al despojando, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea e imposible por alguna de las siguientes razones: **a. b. c. d. ...**”

**V.4.-** Sobre este asunto específico, si bien es cierto el texto legal ya transcrito prevé la posibilidad de acudir a las **COMPENSACIONES**, no lo es menos que ésta excepción a la regla está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, las cuales deben observarse juiciosamente, pues de lo contrario se iría en contravía del espíritu de la misma ley, que ante todo está inspirada en garantizar el retorno a los campos y recomposición de la familia desplazada y despojada, recurriendo si es del caso a brindarle a la solicitante y a su núcleo familiar todas las posibilidades legales – constitucionales que prácticamente le aseguran que tan desastrosos hechos violentos nunca más volverán a suceder, separándose eso sí de los designios de la propia naturaleza, respecto de los cuales el hombre no puede disponer.

**V.5.-** Así las cosas, sin pretender desconocer el contenido de las pretensiones subsidiarias **PRIMERA** y **SEGUNDA** del libelo incoatorio, lo evidente es que no se dan los presupuestos consagrados por la normatividad citada, para acceder a las mismas, ya que en realidad hasta la fecha, no se erige con suficiencia una verdadera motivación, para que la restitución se torne imposible, o por lo menos no obran pruebas que ameriten circunstancias que por su naturaleza u otra razón, impidan la permanencia de la solicitante y su núcleo familiar en

*el predio cuya propiedad se restituye a través del presente proceso. No obstante lo anterior, se advierte eso sí, que de presentarse fenómenos naturales u otros factores desestabilizadores, en el control pos—fallo y previa la realización de los estudios especializados que sean necesarios, así como la información que se allegue por parte de CORTOLIMA o de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS o cualesquier otra entidad, se podrá estudiar nuevamente el aludido petitum.*

**V.6.- GARANTIAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES QUE BLINDAN LA RESTITUCION JURIDICA DE LOS INMUEBLES ABANDONADOS.** *Como se ha decantado a lo largo de esta sentencia, es obligación del Estado otorgar junto con la restitución, un mínimo de garantías para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, sobre los derechos de uso, goce y explotación, así como la reparación de los daños causados.*

*Consecuentemente con lo dicho, y atendiendo las actuales condiciones del predio a restituir, conforme a las observaciones resultantes de la inspección ocular realizada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y la información adicional suministrada por la víctima solicitante, se dispondrá que la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordine en forma armónica con la Alcaldía del municipio de Lérída o la gobernación del Tolima, o los Comités Técnicos del SENA o el Ministerio de Agricultura y UMATAS, y demás entidades oficiales sobre la existencia de PROYECTOS PRODUCTIVOS, los cuales se deberán poner en conocimiento de la solicitante, para que en lo posible haga uso de ellos y se haga realidad la vocación transformadora y reparadora de la restitución que ha predicado la Ley.*

## **VI.- DECISION**

*En mérito de lo expuesto el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima) administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,*

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: RECONOCER** *la calidad de víctimas y PROTEGER el derecho fundamental a la RESTITUCIÓN de TIERRAS tanto a la señora ELSY MURCIA SANDOVAL identificada con cédula de ciudadanía No. 28.796.868 expedida en Lérída (Tol) como a su núcleo familiar, integrado por sus hermanas y copropietarias DEYANIRA y LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL, identificadas con las cédulas de*



ciudadanía Nos. 28.796.705 y 28.797.051, expedidas en Lérída (Tol) respectivamente, sobre el bien inmueble de su propiedad, del cual habían sido despojadas.

**SEGUNDO: ORDENAR** en favor de las víctimas y solicitantes en su calidad de co-propietarias, señoras **ELSY, DEYANIRA y LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL**, debidamente identificadas en el numeral anterior, la **RESTITUCION** del inmueble denominado registralmente como **GUACOLDITA** ubicado en la Vereda San José del Municipio de Lérída, Tolima, y distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 352-6224 y código catastral No. 00-02-0015-0013-000, con extensión de **CINCO HECTAREAS CON CUATRO MIL ONCE METROS CUADRADOS (5. Has 4011 M2)**, al que corresponden las coordenadas planas y geográficas que a continuación se enuncian, así como los siguientes linderos especiales:

#### 6. COORDENADAS

(Incluir las coordenadas del los puntos relevantes de contorno del predio y los que cruzan con la

SISTEMA DE COORDENADAS	ID PUNTO	COORDANADAS PLANAS		COORDANADAS GEOGRAFICAS	
		NORTE	ESTE	LATITUD ( ' '' )	LONG ( ' '' )
EN PLANAS SISTEMA DE COORDENADAS DE MAGNA COLOMBIA BOGOTA Y EN GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS	1 aux	1025720,949	903568,1836	4°49'41,665"N	74°56'48,483"W
	2 aux	1025729,602	903513,5906	4°49'41,944"N	74°56'50,255"W
	3 aux	1025771,439	903416,1693	4°49'43,302"N	74°56'53,418"W
	4 aux	1025749,845	903335,4849	4°49'42,596"N	74°56'56,035"W
	5 aux	1025769,267	903261,1631	4°49'43,225"N	74°56'58,448"W
	6	1025841,016	903109,9729	4°49'45,554"N	74°57'3,357"W
	7	1025844,754	903078,4177	4°49'45,674"N	74°57'4,381"W
	16	1025783,762	903073,0342	4°49'43,689"N	74°57'4,553"W
	17	1025719,159	903122,9373	4°49'41,588"N	74°57'2,931"W
	18	1025657,53	903171,0287	4°49'39,584"N	74°57'1,368"W
	19	1025655,281	903263,9884	4°49'39,515"N	74°56'58,351"W
	20	1025642,84722	903457,20484	4°49'39,118"N	74°56'52,081"W
21 aux	1025603,889	903500,5038	4°49'37,852"N	74°56'50,674"W	
0 aux	1025749,646	903381,9261	4°49'42,591"N	74°56'54,528"W	

Anexo. Descripción Detallada De Linderos (Seguir el Diligenciamiento como el Modelo para cada uno de los predios sobre los que se Solicita Parte o Totalidad)	
<b>Lote A</b>	<b>Predio denominado GUACOLDITA se localiza en la Vereda SAN JOSE zona rural del Municipio de LERIDA en el Departamento del TOLIMA, este predio se encuentra localizado en la cartografía base del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) identificado por el siguiente número catastral 00 02 0015 0013 000 y con una área de Terreno de 5 HAS 4011 M2. (según información del levantamiento topográfico de la UAEGRTD); alinderado como sigue:</b>
<b>NORTE:</b>	Se toma de partida el punto No. 7, de este se parte en dirección Oriente en línea quebrada hasta llegar No. 5 aux, colindando con el predio del señor Juan Ardila alinderado por la quebrada Guacoldita, con una distancia de 199,127 metros. Sigue en dirección oriente en línea recta hasta llegar al No. 4 aux, cambiando de colindancia con el señor Gustavo Beltrán alinderado por la quebrada Guacoldita, con una distancia de 76,817 metros. Luego tomando la dirección oriente en línea quebrada hasta llegar al No. 1 aux, colindando con el predio de Gustavo Beltrán alinderado por la quebrada Guacoldita, con una distancia 248,330 metros.
<b>ORIENTE:</b>	Desde el punto No. 1 aux, en línea recta y en dirección Suroeste alinderado por cerca de alambre hasta llegar al No 21 aux, colindando con la con el predio del señor Gustavo Beltrán, con una distancia de 135,216 metros.
<b>SUR:</b>	Desde el punto No. 21 aux, se sigue en sentido noroeste en línea quebrada alinderado por cerca de alambre hasta el punto No. 18, y en colindancia con el predio de Dioselina Ávila con una distancia de 343,432 metros.
<b>OCCIDENTE:</b>	Desde el punto No. 18, en dirección Noroeste en línea recta alinderado por cerca de alambre hasta llegar al punto No. 16, en colindancia con el predio lote 61 de Elsy Murcia con una distancia de 159,804 metros. Desde ese punto se sigue en dirección norte hasta llegar al punto No. 7, volviendo al punto de inicio y colindando con el predio de lote 61 de Elsy Murcia, con una distancia de 61,229 metros.

**TERCERO: ORDENAR** el **REGISTRO** de esta **SENTENCIA** en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 352-6224 correspondiente al predio **GUACOLDITA**. Secretaria proceda de conformidad, librando las comunicaciones u oficios pertinentes a la

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tolima), para lo cual se ordena expedir copias auténticas de esta sentencia y cuantas sean necesarias para el citado fin.

**CUARTO: DECRETAR** la cancelación de las medidas cautelares que afecten el inmueble restituido e individualizado en el numeral anterior, específicamente las plasmadas en las ANOTACIONES No. 7 y 8 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 352-6224. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tol), para que proceda de conformidad.

**QUINTO:** Conforme a lo anterior, **OFICIAR** por Secretaría al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que dentro del perentorio término de dos (2) meses, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a la actualización del PLANO CARTOGRAFICO O CATASTRAL del predio GUACOLDITA siendo sus linderos actuales los relacionados en el numeral SEGUNDO de ésta sentencia.

**SEXTO:** Disponer como medida de protección, la restricción establecida en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar durante el término de dos (2) años, siguientes al proferimiento de esta sentencia. Secretaría libre comunicación u oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armero (Tol).

**SEPTIMO:** En cuanto a la diligencia de entrega material del predio objeto de restitución, el Despacho de conformidad con los preceptos establecidos en el inciso segundo del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011, comisiona con amplias facultades al señor Juez Promiscuo Municipal (Reparto) de Lérida (Tol), a quien se advierte que por tratarse de un proceso de justicia transicional, deberá realizarla dentro del perentorio término de treinta (30) días, contados a partir del recibo de la comunicación. Para la materialización de dicho acto procesal, contará con el apoyo logístico y colaboración de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Tolima, entidad con la que queda en libertad de realizar las gestiones o coordinaciones pertinentes. Secretaría libre despacho comisorio y las comunicaciones u oficios a que haya lugar al juzgado comisionado y a la referida entidad para que procedan de conformidad.

**OCTAVO:** Secretaría libre oficios a las autoridades militares y policiales especialmente Comandos de la Quinta División y Sexta Brigada del Ejército de Colombia y al Comando del Departamento de Policía Tolima, quienes tienen jurisdicción en el Municipio de Lérida (Tol), para que en ejercicio de su misión institucional y constitucional, presten el apoyo que se requiera e igualmente para que coordinen las actividades y gestiones de

su cargo, y así poder brindar la seguridad que sea necesaria a fin de garantizar la materialización de lo dispuesto en esta sentencia.

**NOVENO:** De conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, se decretan como mecanismos de reparación en relación con los pasivos de las víctimas solicitantes señora **ELSY MURCIA SANDOVAL** identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.796.868 expedida en Lérída (Tol), y **DEYANIRA y LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL**, identificadas con las cédulas de ciudadanía Nos. 28.796.705 y 28.797.051, expedidas en Lérída (Tol), respectivamente, tanto la **CONDONACIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL**, así como de cualquier otra tasa o contribución que hasta la fecha adeude el inmueble objeto de restitución, denominado **GUACOLDITA** así como la **EXONERACION** del pago del mismo tributo, respecto del mismo predio, por el periodo de dos (2) años fiscales comprendidos entre el primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014) y el treinta y uno de diciembre de dos mil quince (2015). Para el efecto, Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar a la Alcaldía Municipal de la misma localidad y demás organismos o entidades departamentales o municipales a que haya lugar.

**DECIMO:** Igualmente, se ordena que lo atinente a los servicios públicos domiciliarios y deudas crediticias del sector financiero adquiridas por las víctimas relacionadas en el numeral **PRIMERO** de esta sentencia, con anterioridad a los hechos de desplazamiento y que se hubieren constituido en mora por ocasión del mismo, sean objeto de programas de condonación de cartera, que podrán estar a cargo del Fondo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Secretaria libre la comunicación u oficio a que hubiere lugar.

**DECIMO PRIMERO: ORDENAR** de acuerdo a lo reglado por los artículos 244, 246, 247, 250 y s.s., del Decreto No. 4800 de 2011, que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –Dirección Territorial Tolima, en coordinación con la Gobernación del Tolima – Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía Municipal de Lérída (Tol), dentro del perentorio término judicial de treinta (30) días, contados a partir del recibo de la comunicación y previa consulta con las víctima solicitantes, señoras **ELSY, DEYANIRA y LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL**, adelanten las gestiones o coordinaciones que sean necesarias, para que a través de su programa de **PROYECTOS PRODUCTIVOS**, y con cargo a los recursos del **FONDO DE RESTITUCION** procedan a llevar a cabo la implementación de uno que se adecúe de la mejor forma, a las características del predio y a las necesidades de la mencionada y su núcleo familiar. En el mismo sentido, y sin perjuicio de lo antes dispuesto, conforme a lo preceptuado por el artículo 129 de la Ley 1448 de

Sentencia Restitución Tierras No.: 73001-31-21-011-2013-00166-00

2011, podrán acudir a los mecanismos previstos por la norma en cita, a fin de financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva. Secretaría libre la comunicación pertinente a las entidades administrativas territoriales, financieras y crediticias relacionadas en el aludido precepto legal, específicamente Gobernación del Tolima y Banco Agrario, Oficina Principal.

**DECIMO SEGUNDO: OTORGAR** a la víctima solicitante, señora **ELSY MURCIA SANDOVAL** identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.796.868 expedida en Lérída (Tol), así como a las copropietarias **DEYANIRA** y **LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL** identificadas con las cédulas de ciudadanía Nos. 28.796. 705 y 28.797.051, respectivamente, el **SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL**, administrado por el **BANCO AGRARIO**, a que tienen derecho, advirtiendo a la referida entidad bancaria, que deberá desplegar tal diligenciamiento, dentro del perentorio término de UN (1) MES contado a partir del recibo de la comunicación; en el mismo sentido, se pone en conocimiento de las víctima y del Banco, que éste se concede en forma **CONDICIONADA**, es decir que se aplicará **POR UNA SOLA VEZ**, y única y exclusivamente, respecto de la fracción que ostente cada una de ellas en el predio objeto de restitución, previa concertación entre las mencionadas beneficiarias y el citado establecimiento Bancario, advirtiendo que debe diseñar y ejercer el control y vigilancia que sea necesario para el cumplimiento de la aludida condición. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar.

**DECIMO TERCERO: ORDENAR** al **Ministerio de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, que para la materialización en el otorgamiento tanto del **PROYECTO PRODUCTIVO** como del **SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL**, dispuesto en los dos numerales que anteceden, se dé **PRIORIDAD Y ACCESO PREFERENTE** a las víctima solicitantes y beneficiarias ya citadas, con enfoque diferencial dentro de los **Programas de Subsidio Integral de Tierras** (Subsidio para la adecuación de tierras, Asistencia Técnica Agrícola, e Inclusión en Programas Productivos), coordinando lo que sea necesario con el **BANCO AGRARIO** la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS**, y la **SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**, y demás **ENTIDADES TERRITORIALES** que prevé el art. 250 del Decreto 4800 de 2011. Secretaría libre las comunicaciones u oficios a que haya lugar.

**DECIMO CUARTO: NEGAR** por ahora las pretensiones **SUBSIDIARIAS PRIMERA** y **SEGUNDA del libelo incoatorio**, por no cumplirse a cabalidad las exigencias establecidas en los artículos 72 inciso quinto y 97 de la Ley 1448 de 2011, advirtiendo que en el control pos fallo de ésta sentencia, de comprobarse que por efectos de la naturaleza o de otra índole no imputables a la solicitante, que afecten el inmueble, se podrán

tomar las medidas pertinentes.

**DECIMO QUINTO: NOTIFICAR** personalmente o a través de oficio o comunicación telegráfica la presente sentencia de conformidad a los preceptos establecidos en el artículo 93 de la Ley 1448 de 2011, a las señoras **ELSY, DEYANIRA y LEOPOLDINA MURCIA SANDOVAL**, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Central y Dirección Territorial Tolima, al señor Gobernador del Departamento del Tolima y al señor Alcalde Municipal de Lérica (Tol). Secretaría proceda de conformidad.

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**



CARLOS ARTURO PINEDA LOPEZ

Juez-